



A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Míriam Nogueras i Camero, en su calidad de diputada de Junts per Catalunya y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y s.s. del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando la respuesta por escrito.

La revista *The New Yorker* publicó el pasado lunes 18 de abril el informe *CatalanGate, Extensive Mercenary Spyware Operation against Catalans Using Pegasus and Candiru*, elaborado por el laboratorio The Citizen Lab de la Universidad de Toronto, en Canadá y que tiene como misión investigar sobre el uso de la tecnología en la vulneración de los derechos humanos.

En un extenso reportaje, *The New Yorker* recoge hechos que evidencian que al menos sesenta y cinco teléfonos pertenecientes a ciudadanos vinculados al proceso de independencia de Catalunya (entre ellos eurodiputados, 4 Presidents de la Generalitat, Presidents del Parlament de Catalunya, miembros de organizaciones civiles, diversos cargos políticos, abogados o sus familiares) pero también algún político vasco, han sido objeto de espionaje a través de la infección, directa o indirecta, de su terminal de teléfono, mediante los software maliciosos Pegasus y Candiru. Según Citizen Lab, se trata del espionaje político con el mayor número de víctimas detectado en la historia.

Aunque la compañía productora del software, NSO Group, no informa de quiénes son sus clientes, según informaciones publicadas en 2020 esta empresa israelí tenía como cliente al Gobierno de España. Por otro lado, es sabido que la empresa solo vende este método de espionaje a Gobiernos, o a sus agencias de inteligencia, y no a particulares. Según la empresa, el objetivo del programa es destinarlo a la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.

En el listado de nombres que Citizen Lab cita como víctimas de espionaje digital por parte del Reino de España, se encuentran personas que viven o pasan parte de su tiempo fuera del territorio español, por su situación de exiliadas o por cuestiones laborales. Entre ellos, se encuentra el President Carles Puigdemont y los consellers Toni Comín y Clara Ponsatí, todos ellos miembros del Parlamento Europeo. **¿Es consciente el Gobierno español de que la jurisdicción competente para investigar estas prácticas delictivas es la del Estado en cuyo territorio ha sido intervenido el dispositivo en cuestión?**

Congreso de los Diputados, a 19 de abril de 2022

Míriam Nogueras i Camero
Diputada de Junts per Catalunya